



FOTOGRAFÍA: CLAUDIO CORTES



Andrés Longton:

“Debe haber mayor celeridad en las relaciones con Venezuela. El canciller debe abocarse a eso”

Alex von Baer

Desde diciembre que el senador RN Andrés Longton empezó a cooperar con el equipo de seguridad del Presidente Kast, pues en el Gobierno veían con interés una serie de proyectos que el parlamentario —y otros RN— habían presentado para frenar la crisis migratoria. Apenas se instaló en La Moneda, Kast le dio urgencia a los proyectos que se tramitan ahora en la comisión de Gobierno del Senado, que también integra Longton.

Desde ahí, el senador defiende la estrategia migratoria del Ejecutivo, aunque alertando sobre los pendientes de una de las principales promesas de Kast, la que se liga con otro tema en el que está involucrado: seguridad, donde la agenda se agitó la semana pasada con la remoción de la exministra Trinidad Steinert.

—El exsubsecretario del Interior Rodrigo Ubilla y el oficialismo presionaron porque se iniciaran expulsiones para dar señales a la ciudadanía, además de la zanja. Se realizaron ya tres vuelos, pero sin venezolanos. ¿Hubo una demora inicial?

El senador RN dice que, de esas gestiones de Pérez Mackenna, “depende el éxito” de las expulsiones y otras medidas que Interior está tomando, en una agenda clave para Kast.

—La zanja es lo suficientemente contundente para mostrar que cambió la mano; junto con un comisionado especial, la ostensible baja del 79% en los ingresos irregulares entre marzo y mayo, y un aumento del 92% en las expulsiones administrativas, una falencia del Gobierno anterior. Cuando Kast era candidato, dio un plazo y generó salidas voluntarias, 2.100; en cifras, hay un cambio. Pero tiene que haber mayor celeridad en restablecer las relaciones con Venezuela para que se pueda expulsar y reconducir. Es un pendiente y hay que generar las instancias para acelerarlo, porque la mayor presión es

de ingresos y expulsiones pendientes de venezolanos. Es una patita de la mesa que falta por concretar.

—El Presidente se defendió indicando que expulsar a 300 mil era “una metáfora”, y ha llamado a no quedarse con las frases, pero parecieran importantes si son temas sensibles.

—Sí, el lenguaje genera realidades. Pero llamaría a la calma, se está haciendo la pega, independiente del número de acciones, que supuestamente iban a ser superiores; pero no es de la noche a la mañana, aunque se generó esa sensación con las palabras del Presidente.

—Son miles de expulsiones pendientes, ¿cómo concretarlas? Operativamente es difícil.

—Sí. Lo primero es restablecer la ruta a Venezuela, o rutas alternativas por Colombia y Brasil. Además, el Gobierno está avanzando en muchos proyectos: el que perfecciona el procedimiento de expulsión para que la PDI pueda ingresar a domicilios y notificar más rápido. Para desincentivar ingresos, el que los beneficios sociales no lleguen a irregulares, y las fiscalizaciones a empleadores para desincentivar con-

trataciones al margen de la ley.

—El subsecretario Pavez dijo en abril que se aumentará la frecuencia de los vuelos, y que habrá dos buses mensuales. ¿Hay plazos?

—Lo que hablamos con Migraciones es que un número determinado de buses iba a salir mensualmente a Perú y Bolivia, en paralelo a los vuelos, en una estructura en que ambos sean cotidianos en los siguientes meses. Pero se debe fortalecer el presupuesto. Hay un cronograma y esperamos que se cumpla, porque hay altas expectativas ciudadanas.

—Usted habló de centros de internación para retener a los detenidos. ¿Hay algún avance?

—Yo no he visto avance. Son efectivos para un flujo de salida eficiente, pero para llegar a ello, hay que aceitar mejor la máquina (de expulsiones), pero llevamos dos meses recién.

“Tiene que haber más complicidad entre Cancillería e Interior”

—Además de esas medidas, entró la indicación para que centros de salud y



educación deban informar datos de irregulares, si se los requiere Migraciones. ¿Están preparados jardines y consultorios, cuando a veces son personas que delinquen?

—El migrante irregular cuando ingresa a nuestro país solicita un RUT provisorio; y en hospitales y colegios, se les da otro número distinto. Solicitar esos datos es provechoso para ejecutar expulsiones, y que el Estado sea más eficiente para que irregulares no abusen de las instituciones: hay 500 mil migrantes que no ponen un peso al sistema, cuando los recursos son limitados y el sistema está saturado, postergando a los nacionales y extranjeros regulares. Sería perjudicial que el Estado teniendo información de personas que incumplen la ley, no la comparta. ¿Por qué tendría que ocultarla? No es sostenible, y no son datos de Salud.

—La ministra de Salud, May Chomali, puso reparos por tratarse de datos sanitarios.

—La ministra no tenía toda la información, porque su opinión no se condijo con el tenor de la indicación: no se comparten datos sensibles ni se deja de atender. Uno espera que antes de emitir una opinión, la ministra de Salud converse con Interior, o que Interior le informe.

—La ministra y también Jaime Mañalich, advirtieron un riesgo sanitario: de que la norma opere como disuasivo para que vayan los migrantes a atenderse, generando contagios.

—Es inverosímil que un irregular no vaya a atenderse porque esté pensando que sus datos sean compartidos y arriesga un procedimiento migratorio. ¡Ya hemos normalizado la irregularidad! Que se le contrate sin consecuencias, que vaya a hospitales, a jardines con recursos Junji, gratis, con el incentivo perverso del “no pasa nada, el Estado no lo va a perseguir, vengán porque los recursos alcanzan para todos”, no. No se pueden aprovechar del sistema. El Gobierno dijo: “El que incumple la ley, no le saldrá gratis”.

—La encuesta Cadem mostró 65% de apoyo a esta medida. ¿La anhela la gente?

—Y teniendo claridad de lo que busca, el apoyo puede ser incluso mayor.

—En la restricción de beneficios, además del proyecto que prohíbe el RUT provisorio, se ha hablado de cambios administrativos. ¿Cuáles?

—Lo de Junji: que en los jardines hoy tienen prioridad garantizada los hijos de migrantes ilegales. Nadie dice que no puedan ser recibidos, pero no pueden seguir siendo los primeros en la fila por sobre nacionales o extranjeros regulares. Luego, el Registro Civil adoptó un criterio por determinados fallos judiciales: al hijo de un irregular lo nacionalizan chileno, lo que incentiva a venir, tener un hijo y pedir la reunificación familiar. Pero los fallos atienden al caso concreto. Y tercero, el decreto de Bachelet que establece que para aseverar que no se tienen recursos (para cotizar en Fonasa), se le pone más exigencia a chilenos o a extranjeros regulares (Ficha del Registro Social) que a irregulares, que con su

solo testimonio en una declaración jurada ya tienen salud gratuita. Todo esto es premiar al que incumple la ley sobre el que la cumple, pero se puede corregir vía administrativa rápidamente.

—¿Y cuándo debiera estar en vigencia toda esa arquitectura, entre cambios legislativos, administrativos y una frecuencia periódica de expulsiones?

—Espero que ya el segundo semestre parte importante de estas medidas administrativas estén tomadas, porque dependen solo del Ejecutivo; las legislativas, del Congreso. Pero espero que al segundo semestre varias de estas estén en ejecución.

—Y si no es así, ¿no es peligroso para el capital político-ciudadano de este Gobierno que no cumpla la expectativa de frenar la migración irregular?

—El gran bastión de este Gobierno es seguridad y combate a migración irregular. Mantener este tema vigente en las acciones y que repercuta en cifras como las vistas, con mayor intensidad de las medidas, va a permitir que ese capital se mantenga, porque es de las prioridades más relevantes; y el carácter que manifestó el Presidente en campaña es relevante.

—Ahora, si no se avanza con Venezuela, ¿todas esas otras medidas ya no tienen sentido?

—Sí, eso es fundamental. Y el canciller Pérez Mackenna tiene que estar abocado en cuerpo y alma a eso, porque de su rol depende el éxito o fracaso del Gobierno en la materia. Tiene que haber más complicidad entre Cancillería e Interior. Es muy relevante fortalecer las relaciones comerciales, pero no es lo único importante de las relaciones internacionales.

—¿Y qué pasa con eso hoy, que pone énfasis en el rol del canciller? Hasta ahora se supo de intentos frustrados.

—Sí, lo que pasa es que hemos visto muchas gestiones con Perú, Bolivia, pero el gran dilema es con Venezuela y transmitimos esa preocupación. Las diligencias se están realizando, eso nos han transmitido, es de prioridad absoluta, pero no nos dieron plazo.

“La ciudadanía necesita impacto en su vida”

—¿A qué atribuye lo sorpresiva y rápida decisión del Presidente de sacar a Steinert? Esa misma mañana se le permitió capitalizar el operativo en Temucucú.

—Respondió a una acumulación de episodios que terminaron desplazando el foco desde la gestión hacia la figura de la ministra, obligando constantemente al Presidente a intervenir. Eso implicó perder atención sobre la principal preocupación ciudadana, la seguridad, y a esas alturas, ni el operativo en Temucucú ni otras acciones parecían suficientes para revertir una situación que ya se veía muy difícil de sostener políticamente.

—¿Por qué llegó a tal nivel de desgaste, con la frase esa de no “esperaba que me pidieran un plan en detalle” como peak? ¿Se equivocó el Presidente en apostar por ella?

—En su momento la designación fue

ampliamente valorada, incluso por la oposición, pues respondía a fortalecer un área prioritaria con experiencia técnica. Pero el caso volvió a demostrar que las capacidades políticas y comunicacionales son indispensables para sostener una gestión expuesta a presión y escrutinio. Más que un error, son situaciones que pueden surgir. Entonces, ya existía una desconexión evidente entre los esfuerzos concretos —operativos, detenciones y cifras positivas— y el impacto de sus intervenciones públicas. Los errores comunicacionales instalaron un clima negativo difícil de revertir, pese a los intentos por mostrar resultados. La intervención en la Cámara ya fue compleja, y el “plan en detalle”, sumado a una interpección, profundizó aún más el desgaste.

—¿Cuánto daño producía su permanencia? ¿Estaba quedando en cuestión si el Presidente era realmente capaz de cumplir sus promesas en seguridad?

—Mira: no cualquier Presidente habría estado dispuesto a tomar una decisión así en esta etapa. Precisamente por eso, el cambio demuestra un compromiso con las expectativas ciudadanas y con la exigencia de resultados en un tema sensible.

—¿Y hasta cuándo tiene tiempo el Gobierno para revertir la sensación ciudadana en seguridad? Porque a la gente se le agota la paciencia rápido, y el presidente de la UDI reclamó que la promesa en seguridad “está atrasada”.

—Los avances en seguridad se miden tanto por cifras objetivas como por percepción ciudadana, y esta suele tardar más en cambiar. Por eso, además de consolidar la reducción de delitos violentos, es fundamental transmitir planificación y rigurosidad en las acciones. La ciudadanía necesita percibir que existe una estrategia clara, capaz de impactar en su vida. El trabajo del comisionado Alberto Soto en el norte muestra resultados que pueden contribuir a modificar gradualmente esa percepción.

—¿Cómo ve a Martín Arrau en Seguridad, sin mayor experiencia en el área?

—No lo conozco en profundidad, pero ha sido de los ministros más destacados: riguroso, con conocimiento técnico y habilidades políticas. Su cercanía con el Presidente también transmite mayor confianza y coordinación, aunque eleva las expectativas sobre su gestión. Deberá apoyarse de las mejores personas para suplir su vacío en la materia.

—Claudio Alvarado en Interior y Seguridad, adquiere más contrapeso frente al Segundo Piso ahora que la estrategia comunicacional no estará solo en manos de Cristián Valenzuela?

—Es probable que Alvarado pase a tener una influencia mayor en las comunicaciones, por su nuevo rol y su experiencia. Un biministro con oficio puede aportar mayor capacidad de evaluación y contenido en escenarios de alta presión.

—¿Coincide con la explicación de Pavez de meterle “más canas” a la comunicación?

—Es fortalecer el control político de las comunicaciones frente a una oposición cada vez más dura.



Mantener el tema migratorio vigente en las acciones va a permitir que el capital de Kast se mantenga”.



El caso Steinert volvió a demostrar que las capacidades políticas y comunicacionales son indispensables para sostener una gestión expuesta a presión y escrutinio”.